

Latinoamérica : "Las limitaciones de la democracia frenan los avances en salud y derechos".*

Por Timothy Frasca

Aunque el panorama es contradictorio e inconsistente, la región latinoamericana está logrando al menos defender los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de las severas inequidades económicas, inestabilidad política y el peso de una fuerte jerarquía católica activista.

Encuestas de opinión pública indican consistentemente que sobre estos asuntos las personas del continente toman distancia de sus propios líderes eclesiásticos y gobernantes recalcitrantes; consistentemente, mayorías decisivas favorecen el completo acceso al control de la natalidad, educación sexual y aborto sin riesgo en ciertas circunstancias.

Pero Latinoamérica está aún recuperándose de décadas de brutales dictaduras durante los años 70 y 80 las cuales golpearon a la organización social y socavaron la capacidad de estas mayorías para hacer valer sus posiciones y deseos. El permanente "déficit democrático" impide la provisión de servicios adecuados en una variedad de formas, desde el arresto y encarcelación de mujeres que interrumpen sus embarazos en Chile hasta la intimidación de los médicos en Centroamérica o el extraño intento judicial en Argentina para echar por tierra el control de la natalidad con tan sólo una firma.

Algunas veces los intentos conservadores para dar marcha a atrás a décadas de progreso, han alcanzado extremos absurdos, tal como el anuncio en mayo del 2003 por el ministro de salud del Perú, de que cada "persona concebida" debía ser ahora identificada y registrada. Más escalofriante fue el enredo que se armó para prevenir que una víctima de violación de 9 años de edad en Nicaragua reciba un aborto legal, enredo que pasó por encima de las leyes de dos países involucrados en la situación.

La hostilidad provocada por tales incidentes a menudo despierta a la población local sobre la realidad de la salud sexual y reproductiva y las falencias de sus gobernantes en defender los intereses ciudadanos. Pero en general en la región, las partes batallan cada una hacia un empate al nivel legislativo y ningún lado puede alterar mayormente el estatus quo.

Por otro lado, los avances legislativos son pocos y lejanos entre parlamentarios que permanecen nerviosos y permeables a represalias de los bien financiados grupos conservadores.

En muchos países, la jerarquía católica ejerce gran influencia por su otrora defensa de los derechos humanos contra la tortura y la desaparición durante los días siniestros de dictadura o por su permanente papel de mediación en disputas políticas. La inestabilidad en Bolivia y Perú, la guerra en Colombia y el desastre económico de 2002 en Argentina, empujaron a los obispos católicos hacia el vacío de poder, como negociadores políticos y proveedores de

servicios de emergencia social. Esta influencia se torna valiosa en las batallas subsiguientes sobre sexualidad y reproducción.

Por su parte, aquellos defensores de los derechos sexuales y reproductivos, a menudo logran victorias parciales al nivel local o provincial o impulsando la aplicación efectiva de leyes ya existentes. Para aprovechar de estas similitudes que encara la región completa, algunas organizaciones coordinan acciones sobre ciertas fechas conmemorativas y un grupo con base en Perú ha lanzado una campaña para una Convención Regional para los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

Aborto

No es de sorprenderse que el principal tema de conflicto en la región sea el aborto. Un estimado 20% de todos los embarazos terminan en aborto en Latinoamérica, elevándose a un tercio en Chile donde el aborto es prohibido bajo cualquier circunstancia. Aunque casi todos los países de la región permiten el procedimiento en algunos casos, muchos ocurren en condiciones lamentables. Además, los servicios de anticoncepción son aún tan inadecuados que las tasas de embarazos adolescentes no deseados están elevándose en toda la región.

Probablemente el desarrollo más significativo de la década en Latinoamérica en esta materia, es la posibilidad de que el Congreso Nacional de Uruguay, un país con una larga tradición laica, decidiera quitar todas las penalidades criminales para los abortos realizados hasta las 12 semanas. De acuerdo con la ginecóloga y miembro de Católicas para el Derecho a Decidir de Uruguay, Cristina Grela, las recientes muertes de más de 20 mujeres en el Hospital Materno de Montevideo incentivaron a los médicos a la acción, luego de acalorados debates sobre el asunto en la última campaña presidencial. Se armó una coalición de académicos, gremios, grupos de la sociedad civil e iglesias protestantes para apoyar el proyecto de ley, mientras algunos evangélicos se unieron a la jerarquía católica en oposición. Como era de esperar, el asunto atravesó fronteras partidarias, apareciendo tanto colaboradores como adversarios entre partidos conservadores y de izquierda.

Según Lucy Garrido del magazine *Cotidiano Mujer*, “La población uruguaya responde al argumento de que éste es un problema de salud pública y de democracia. Tenemos una mentalidad pluralista y tenemos orgullo en nuestro moderno sistema de salud; es vergonzoso que las mujeres en los confines del país estén aún muriendo a consecuencia del aborto”.

En México, una intentona de los conservadores incentivó un importante avance sobre el aborto en la ciudad capital, la cual tiene su propia legislatura bajo el sistema federal del país. Después de la histórica victoria en el 2000 del candidato presidencial Vicente Fox del Partido de Acción Nacional (PAN), autoridades del PAN en el tradicional estado de Guanajuato buscaron derogar una ley que permitía el aborto en casos de violación. Según Pilar Sánchez, de Católicas por el Derecho a Decidir de México, numerosos subterfugios también

fueron aplicados para bloquear el acceso al aborto a través de los juzgados y demoras administrativas.

Al mismo tiempo, casos notorios captaron la atención pública, incluyendo las negativas de aborto para una joven víctima de violación en Tijuana y una trabajadora del hogar con capacidad mental limitada embarazada por su empleador. Eventualmente, “el tiro de la ofensiva conservadora salió por la culata”: el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) cambió su posición y apoyó una medida de liberalización en la asamblea legislativa de la ciudad de México. Violación o amenaza para la vida de la mujer son ahora motivos válidos para el aborto en la capital de la nación.

En América Central, la primera mitad del 2003 estuvo dominada por otro incidente relativo al aborto, el desconcertante caso de “Rosa”, violada a los 9 años de edad. Su familia fue acosada y atacada por tratar de ayudarla a terminar con el resultante embarazo. Trabajadores sociales en Costa Rica, donde los padres analfabetos estaba viviendo, mostraron a la niña ropas de bebé y la foto en ultrasonido del feto, mientras circulaban rumores de que el padre de Rosa, quien apoyó la decisión de abortar, era en efecto el violador. (Un trabajador de una granja local que no es pariente, ha sido arrestado en el caso). La salida de la familia de Costa Rica fue también dificultada, haciendo el eventual aborto más y más difícil.

El caso ilustra cómo las autoridades oficiales en Latinoamérica son fácilmente influenciadas por los conservadores, mientras que la opinión pública tiende a simpatizar con las decisiones de aquellas personas más directamente involucradas. Un panel de médicos designados por el gobierno en Nicaragua llegó a la inexplicable conclusión de que el embarazo de Rosa y el eventual aborto eran igualmente peligrosos para su salud y por ende se le negaba este servicio. Entonces las organizaciones de mujeres obtuvieron tratamiento privado y refugio para ella, frente a un furioso ataque publicitario.

Como resultado de la penosa situación que atravesó Rosa, relata Ana María Pizarro de la organización Sí Mujer en Managua, el país ahora está consciente de la legalidad del aborto en Nicaragua y de las enormes dificultades involucradas en su obtención. “Fue portada de los diarios por tres semanas” dijo ella, “incluso en programas deportivos para hombres, programas de cocina, en todos lados”. Ya los médicos no pueden más pretender que el procedimiento sea ilegal, mientras hacen dinero practicando abortos “clandestinos”, añadió. Las dos ministras involucradas en el caso ya han sido destituidas.

En Brasil, intentos para ampliar el acceso al aborto a través de la legislatura nacional, han sido obstaculizados mientras que iniciativas al nivel local y estatal para respetar leyes existentes —que permiten el aborto en condiciones de violación y amenaza de vida— han prosperado. Una estrategia clave es el uso de regulaciones administrativas para fortalecer el acceso al aborto como parte de la garantía del cuidado de la salud “universal y libre” perfilado en la constitución.

De acuerdo con Sonia Corrêa del DAWN (Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era), las instituciones de salud pública a menudo ofrecen los servicios de aborto a través de programas que protegen a las mujeres de la violencia sexual. El advocacy ha tenido éxito en aproximadamente un tercio de las clínicas públicas y hospitales a lo largo del país, donde el servicio ahora está disponible. No obstante, dice, la falta de una ley nacional es una limitante y ahora los conservadores están presionando para regresar por la ruta administrativa.

Los países andinos con gran población indígena son los más afectados por la reimposición de la llamada “regla de mordaza” del 2001 por el presidente George W. Bush, la cual prohibió a organizaciones que recibieran fondos de la cooperación estadounidense, proveer abortos, derivar a clientes a otros servicios por este motivo, o aún referirse al tema. En Bolivia, según Jimmy Tellería, director del Centro de Investigación Social, Tecnología Apropiada y Capacitación (CISTAC), el 85% de los grupos activos en salud reproductiva, dependen de dineros provenientes de los Estados Unidos. Como resultado, el jefe de la oficina local de la USAID, actúa como una suerte de procónsul romano, revisando y aprobando cualquier material impreso producido por dichas entidades.

Una anomalía en el panorama regional es Chile, uno de los pocos países en Latinoamérica donde el aborto es aún tan tabú que el tema ni siquiera sale al debate. La saliente dictadura del General Augusto Pinochet penalizó nuevamente el aborto terapéutico como su último acto oficial en el año 1990. Un reciente caso involucró a una mujer con un feto no viable, forzada a dar a luz al infante y ser testigo de su muerte, mientras un sacerdote ofrecía su bendición.

Otros temas

Algunos países están logrando avances sobre otros temas de salud reproductiva y sexual. Por ejemplo, a pesar de la desastrosa crisis económica de 2001 que echó a la calle al menos un cuarto de la fuerza de trabajo de Argentina, en octubre de 2002 la legislatura del país dio paso a un comprensivo programa nacional de salud sexual y paternidad responsable, un signo que la socióloga María Alicia Gutiérrez del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), llama una “situación profundamente paradójica”. Por primera vez, los principales partidos del país coincidieron en una ley nacional para promover el uso del condón y otorgar autonomía sobre asuntos de salud sexual en adolescentes mayores de 13 años. Pero a pesar del importante avance legal, la asignación presupuestal con el cual se llevan a cabo los programas autorizados es a menudo escasa.

Un episodio particularmente extraño ocurrió en Córdoba, la segunda ciudad de Argentina, donde una fundación integrista convenció a una jueza local para prohibir anticonceptivos basados en estrógenos y el DIU por todo Argentina, forzando a la jerarquía católica local a tomar una prudente distancia. El ministro

de salud de Argentina llamó la acción “absurda” y “terrorismo en la salud pública”.

A pesar de esta aberración, Coca Trillini de Católicas por el Derecho a Decidir-Buenos Aires, dice que la atmósfera política actual es “generalmente favorable”, pues las autoridades tienen que trabajar duro para recuperar la confianza popular después de los recientes hecatombes. “Ellos están atentos a las demandas y tratan de balancear posiciones extremas”, dice, notando que la saliente primera dama respaldó públicamente la nueva ley de salud reproductiva.

Por su parte, organizaciones civiles chilenas lograron revertir un ataque legal en contra de la anticoncepción de emergencia (AE) en 2002, descubriendo la sensibilidad de las cortes locales a la opinión pública. Los conservadores entablaron y ganaron un juicio para prohibir la venta de un producto de AE por considerarlo “abortivo”, pero bajo la jurisprudencia chilena, tales decisiones no establecen precedentes. Antes de que el ministro de salud autorice un segundo y similar producto para la venta, médicos, académicos, científicos, grupos de mujeres y la poderosa logia masónica se movilizaron para encabezar el abrumador apoyo mayoritario que la AE gozaba en el país. Los esfuerzos fueron exitosos y en un segundo fallo la corte suprema del país dio marcha atrás.

Activismo en la Iglesia

La intervención religiosa toma distintas formas en estas situaciones. En Argentina, la caridad católica está salvando a muchos residentes de la indigencia total y la jerarquía ha criticado las políticas económicas que llevaron al país a la ruina actual. Según Gutiérrez, la ayuda caritativa genera una enorme simpatía a través de las extensas redes sociales de la Iglesia Católica, especialmente entre las mujeres pobres. “No se puede pelear por los derechos reproductivos sin una simultánea pelea por la sobrevivencia”, dice. “Tenemos que combinar salud, educación, placer y tolerancia como derechos colectivos, no sólo como algo personal”.

La inestabilidad política también refuerza el rol de la jerarquía católica en Bolivia, dice Teresa Lanza de Católicas por el Derecho a Decidir -La Paz, donde la mediación de los obispos es rápidamente solicitada durante las recurrentes crisis de gobernabilidad. “Los obispos llaman a un nuevo diálogo y retornan al escenario central”, dice Lanza. “Ganan credibilidad y están por encima de la crítica” cuando intervienen en temas de derechos reproductivos y sexuales.

En México, la reacción sobre la liberalización del aborto en la capital no tardó en llegar. Según Sánchez, los políticos aún tienen miedo de las influencias financieras de los conservadores y el único partido que impulsó sin ambigüedad los derechos al aborto, México Posible, rápidamente sintió el peso de la reacción. Anticipándose a las elecciones legislativas, cuatro obispos publicaron un llamado “Diez Mandamientos” electoral, para guiar a los votantes

católicos, acercándose al límite legal de la estricta separación entre el Estado y la iglesia en México. Aunque los “Mandamientos” no indicaron explícitamente al partido en las pautas del voto, México Posible demandó a los obispos y tuvo el apoyo del PRD.

En el Perú los representantes de la línea dura del catolicismo han ocupado importantes posiciones en el gobierno, mientras que el país trata de restaurar las instituciones democráticas minadas por la dictadura de Alberto Fujimori. En mayo 2003, el ministro de salud Fernando Carbone propuso modificar una regulación interna para no sólo “proteger la vida del no nacido” sino también “oficializar un registro de todos los concebidos como sujetos de derechos constitucionales”. A pesar de lo absurdo de esta propuesta, la situación ilustra la fragilidad de los derechos reproductivos en la región.

Estrategias

Varias sugerencias emergen entre activistas y observadores sobre cómo lograr mayores avances en estas áreas. Una meta clave es mantener vivo el debate sobre esos temas en la agenda pública. Una aproximación es el llamado para la Convención Interamericana para los Derechos Sexuales y Reproductivos, que se originó en el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), con sede en Lima. La coordinadora de la campaña, Roxana Vásquez, caracteriza la iniciativa como “un texto y un pretexto”, un proceso de pensamiento colectivo a lo largo del continente que no empieza con un documento propuesto sino pretende lentamente llegar a uno.

La campaña ha sido lanzada en seis países, con cuatro más a seguir. Vásquez dice que el propósito de focalizarse en estos derechos es “correr contra la corriente”, distinto al amplio consenso sobre el tema de violencia contra la mujer. Desafortunadamente, los derechos sexuales y reproductivos serán “altamente volátiles” según Vásquez, fácilmente transables por líderes políticos, mientras las fuerzas conservadoras continúen gustosas de ceder terreno en otras áreas para lograr sus metas precisamente en éstas.

Vásquez añade que la discusión de una convención regional podría ofrecer una alternativa al enfoque de las mujeres como víctimas y la denuncia de abusos en su contra. Un instrumento legal no dependería de los cambios gubernamentales o congresales sino más bien inscribiría derechos en los sistemas nacionales de modo permanente.

Vásquez argumenta que a pesar de los obstáculos, una postura proactiva es importante en momentos en que las plataformas de Cairo y Beijing se encuentran bajo un ataque sistemático.

La Campaña contra Fundamentalismos es otra iniciativa regional para vincular grupos en Latinoamérica para la defensa de las mujeres dondequiera que resulten afectadas por opresión con base religiosa, mutilación genital o intentos de sacarlas de la vida pública. El fundamentalismo demanda consistentemente el “sacrificio de la vida de las mujeres” como el componente clave para su

proyecto social, dice la Articulación Feminista MARCOSUR, la red informal detrás del proyecto. Una meta de la campaña es la circulación de testimonios de las mujeres que enfrentan estas ásperas condiciones alrededor del mundo.

Grupos de ciudadanos, especialmente organizaciones de mujeres, han logrado consistentemente prevenir los intentos más exagerados por volver atrás en lo referente a derechos reproductivos en Latinoamérica, algunas veces incluso anotando nuevos logros. Mientras la democracia se profundice y se consolide a lo largo de la región, el deseo inequívoco de las mayorías para opciones y servicios que protejan su salud sexual y reproductiva, ciertamente será una fuerza a tener en cuenta.

Sobre el autor

Timothy Frasca es periodista estadounidense residente en Chile desde hace 20 años, director de la Fundación CIPRESS.

e-mail: tfrasca@yahoo.com

*Traducción del artículo del autor publicado en CONSCIENCE, Vol. XXIV N°2 (summer 2003). Se publica con autorización de la revista.